CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA INVESTIGAR A FONDO LAS MUERTES DE PERIODISTAS E IMPEDIR QUE SE SIGAN SUSCITANDO AGRESIONES CONTRA ÉSTOS, SUSCRITA POR EL SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

"El periodista no es buscador de problemas.

Es buscador de verdad, de datos, de información, de métodos."

Por la evidente influencia que el periodismo tiene en la sociedad, este suele ser conocido como "el cuarto poder". Debido a la alarmante situación de inseguridad en nuestro país, el periodismo se ha convertido en una de las profesiones más riesgosas. El periodista, hoy día, desarrolla su profesión en una situación sumamente vulnerable, a consecuencia de que la libertad de prensa se ha visto repetidamente obstruida por acontecimientos violentos.

Cada vez son más los comunicadores que, en el ejercicio de su profesión, son víctimas de amenazas, intimidaciones, persecuciones, atentados, desapariciones forzosas y en el peor de estos casos, la muerte, como les ha ocurrido a 148 periodistas en los últimos 39 años.

Los ataques sistemáticos a reporteros y periodistas representan un lastre en nuestro país que refleja la lamentable condición de un estado fallido, en el que la incivilidad, la inseguridad y la impunidad, son sólo algunos ingredientes para socavar el estado de derecho y la consecuente democracia, vistos estos últimos por algunos como una diada inseparable. Ya que según la jurisprudencia de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los derechos de libertad de pensamiento y de libre expresión y manifestación de las ideas son indiscutiblemente pilares de los modernos estados democráticos de derecho.

En 1984 había sido asesinado el conocido periodista Manuel Buendía y, según la fundación del mismo nombre, el número de atentados contra periodistas aumentó paulatinamente en cada sexenio: de acuerdo con un estudio realizado por la organización Artículo 19, en el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) fueron asesinados 6 profesionales de la información; durante la administración lopezportillista (1976-1982) la cifra ascendió a 12; en el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) resultaron muertos 33 informadores; y, conforme un minucioso rastreo hemerográfico de la Fundación Manuel Buendía, a lo largo del régimen de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) cayeron 46 profesionales de la tecla informativa. Ello da un total de 97 periodistas asesinados en un lapso de 24 años, cifra con la cual México ocuparía el primer lugar en ese terreno a nivel latinoamericano, arriba de Colombia, con 89, y Guatemala, con 53.

Las agresiones en contra de periodistas no constituyen algo novedoso, más bien se trata de una tradición de fuerte raigambre en nuestro país. En 1988, por ejemplo, fue asesinado Héctor Félix, reportero de Zeta, después de escribir artículos que criticaban a Jorge Hank Rhon. Por este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a expedir 10 años después una recomendación que exigía el esclarecimiento de este crimen (CIDH 1999).

Han sucedido, además, hechos escandalosos, como la detención el 13 de septiembre de 1996 del editor de El Universal, Juan Ealy Ortiz, por fraude fiscal, en lo que para el director de este diario, Roberto Rock, se trató de una represalia por publicar información sobre cuentas secretas del gobierno. Para el académico Tanius Karam, "el acto contra Healy (sic) fue selectivo y discrecional ya que no se procedió igualmente con otros diarios que tenían problemas fiscales, como el caso de Excélsior".

Actualmente, de acuerdo con el listado de agresiones a los derechos humanos a periodistas denunciados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la lista se ha elevado a partir de 2005, con 72 agresiones; 2006, con 74; 2007, con 84; 2008, con 80, y este año hasta noviembre, con 78.

La CNDH agregó que la cifra puede incrementarse si se suman los casos registrados en las comisiones de derechos humanos de los estados, así como todas las agresiones que no se denuncian.

El homicidio, el pasado mes de diciembre, de Alberto Velázquez, reportero del periódico Expresiones de Tulum, aumentó a 12 el número de periodistas asesinados en 2009 y a 57 la cifra de comunicadores ultimados en los últimos 10 años. Todavía en días recientes se cuenta la muerte de un periodista local en Los Mochis.

En tal virtud, México superó a Irak y ahora emparenta nuevamente con ese deshonroso primer lugar del mundo en el número de asesinatos y agresiones contra periodistas, según informa el director de la Fundación Manuel Buendía, Omar Raúl Martínez. Al presentar el Informe Buendía 2008-2009, explicó que tan sólo en el primer semestre del año 2009, en nuestro país se registraron 142 actos contra el trabajo periodístico y 5 asesinatos, con lo cual, esta tendencia apuntaría a que en el año pasado se duplicaría el número de agresiones contra reporteros respecto a las registradas hace dos años.

"Estas cifras son abrumadoras considerando que en el Informe Buendía 2007 se consignaron 113 casos. No es gratuito, por ello, que se catalogue a 2008 y al primer semestre de 2009 como uno de los periodos más violentos y con mayor número de ataques para el periodismo mexicano en los últimos tres lustros" explicó en conferencia de prensa Raúl Martínez.

Durante el sexenio del ex presidente Vicente Fox nunca se mostró verdadera voluntad política para atender las agresiones a los diversos periodistas y comunicadores, pues más allá del discurso nada existió. Tan es así que durante el último año de su sexenio (2006) se registraron 26 asesinatos de los cuales 95 por ciento aún permanece impune. 70 por ciento de los presuntos autores son funcionarios de gobierno, policías (municipales, estatales y federales), procuradurías locales y General de la República (PGR), y militares; mientras que en 30 por ciento fueron integrantes del crimen organizado, entre otros.

Para aquél entonces, México ya se ubicaba en el segundo lugar más inseguro para los periodistas, sólo después de Irak. Lo que está documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos es la cerrada competencia de quienes atacan más a los periodistas, pues de cada 10 agresiones, 4 son de autoridades y 3 de delincuentes. De acuerdo con la investigación en materia, elaborada por Cencos y Article XIX los datos de 2007 son alarmantes.

Si bien es cierto que en el sexenio de Vicente Fox existió poca voluntad política para proteger a periodistas, la situación se agudiza en los primeros años del sexenio del presidente Felipe Calderón. Tan es así que en 2007, las cifras aumentaron. El número de agresiones registradas fue de 89, 34 más que en 2006. De ellas, 21 por ciento fueron amenazas, 16.5 por ciento agresiones materiales, 15 por ciento agresiones físicas y 6.64 por ciento se trató de asesinatos. Más grave aún resulta el dato que señala que en casi todos los estados del país se registraron agresiones a periodistas, hecho que desdibuja algunas hipótesis que plantean que la violencia contra los comunicadores obedece a los metapoderes (crimen organizado).

Algunos comunicadores y medios de comunicación son objeto de abuso de autoridad en un sentido lato, por parte de los funcionarios públicos, quienes por el contenido de las notas y programas deciden censurarlos usando todo el andamiaje político con el que cuentan. Estos fenómenos merecen consideración.

Ejemplos recientes son el del periodista radiofónico José Gutiérrez Vivó y su Grupo Monitor, quien alegaba un "bloqueo" publicitario del gobierno federal debido a represalias por su postura política; y el de la periodista Carmen Aristegui, quien no fue requerida para renovar su contrato como titular de un espacio radiofónico en W Radio —propiedad de Televisa— presuntamente por los conflictos de interés que generaba, entre otras cuestiones, su cobertura crítica de la ley de medios cabildeada por agentes de la televisora.

Periodistas y luchadores sociales mexicanos han sido, además, víctimas de agresiones por informar sobre asociaciones delictivas de otros giros, como las redes de tráfico y abuso de menores, trata de personas, caciquismo, abusos policíacos y guerra sucia. Un caso que acaparó la atención de medios internacionales fue el de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, amenazada de muerte y privada ilegalmente de su libertad como represalia por denunciar públicamente una red de pederastia que operaba en el Caribe mexicano.

Más recientemente, pueden encontrarse notas de medios de comunicación nacionales y organismos internacionales, dirigidas a los atropellos, abusos y crímenes cometidos en contra de periodistas locales. En Guerrero, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos condenó la muerte de Juan Daniel Martínez Gil, periodista de W Radio y de Radiorama Acapulco, cuyo cuerpo fue encontrado en el mes de julio del año pasado.

Del ese modo, en esta entidad federativa, por esas mismas fechas estuvo de visita el periodista Mike O'Connor, representante del Comité de Protección a Periodistas (CPJ), el cual se desplazó a Acapulco para estudiar de cerca el caso del asesinato del corresponsal de Televisa, Amado Ramírez. En sus propias palabras: "hacer periodismo en Guerrero es como ir a la guerra".

Todavía, el pasado viernes 8 de enero, el periódico Zócalo de Saltillo, Coahuila, dio a conocer a través de su portal de Internet que su reportero Valentín Valdés Espinosa fue ejecutado ese día, luego de ser "levantado" la noche anterior con otros dos periodistas por sujetos desconocidos que viajaban en dos camionetas.

Como se deduce de lo anterior, el fenómeno de la violencia contra los periodistas incluye desde la intimidación y la violencia "legal" hasta la violencia física, secuestro y homicidio contra periodistas y trabajadores de la industria de los medios de comunicación. Para hablar sobre violencia contra la prensa hay que considerar una definición amplia de esta.

La Unidad de Libertad de Expresión de la Fundación Manuel Buendía considera la siguiente tipología de agravios contra las libertades de expresión e información:

1. Ataques públicos o embozados a periodistas: a) acoso u hostigamiento, b) agresión física, c) allanamiento, d) amenazas e intimidación, e) anuncio de bloqueo informativo, f) asesinato, g) atentado a la vida, h) censura, i) decomiso de material, j) desaparición, k) espionaje, l) insultos, ll) intento de secuestro, m) obstaculización, bloqueo informativo, veto o restricciones, n) secuestro.
2. Hechos que pueden significar inhibición o presiones a periodistas: n) arbitrariedad en la edición, o) anuncio de demanda, p) auto de formal prisión, q) cita a comparecer, r) demanda, s) despido, t) detención por parte de autoridades, u) orden de aprehensión, v) renuncia inducida, w) robo, x) soborno, y) suspensión, z) cateo.
3. Ataques públicos o embozados a medios: a) allanamiento, b) amenazas e intimidación, c) amenazas de confiscación, d) amenazas de toma, e) atentado, g) bloqueo informativo, h) censura, i) confiscación, j) toma.
4. Hechos que pueden significar inhibición o presiones a medios: k) anuncio de bloqueo publicitario, l) anuncio de demanda, ll) auditoría fiscal, m) bloqueo publicitario, n) cancelación de un programa o de una concesión, n) cierre temporal o clausura de una emisora, o) demanda, p) embargo, q) robo, r) anuncio de bloqueo informativo.

Un aspecto preocupante de la violencia contra periodistas es que la frecuencia de asesinatos de periodistas a nivel mundial se encuentra en ascenso. Además, la mayoría de los homicidios de periodistas son perpetrados en periodos de paz y en la mayoría de los casos (87 por ciento) la justicia local no logra identificar a los victimarios ni iniciar procedimientos legales.

Para Silvio Waisbord, la violencia contra los periodistas es una de las tres limitaciones centrales de la prensa en América Latina, junto con el marco legal y la economía de la prensa. Waisbord hace notar que mientras en las regiones democráticas liberales desarrolladas ha disminuido casi totalmente la existencia de ataques contra la prensa (limitándose estos a los sufridos por corresponsales en coberturas de conflictos en naciones no desarrolladas), los ataques contra la prensa en Latinoamérica han permanecido latentes.

Durante 2008, el Centro Nacional de Comunicación Social y Article XIX se dieron a la tarea de fortalecer la metodología para el registro y documentación de agresiones a periodistas. De acuerdo con esta investigación, el total de agresiones registradas durante este año fueron 228, de las cuales el mayor porcentaje lo ocupa la agresión física material, seguida de la intimidación, la presión y amenazas.

Como se ha mencionado, la otra cara de la moneda que atenta contra la consolidación de una prensa democrática, la encontramos en las redes de delincuencia organizada. En la medida en que las organizaciones criminales gozan de poder en una región, aumenta el peligro en el que se ponen los medios de comunicación al informar sobre fenómenos criminales. La prensa se ve amenazada porque, a decir de Silvio Waisbord, "es una arena central en la batalla por la expresión pública".

En esa cerrada disputa por constituir la principal fuente de agresiones hacia periodistas, los funcionarios de los gobiernos de los distintos niveles y la delincuencia organizada, en esa dialéctica inevitable, han configurado un escenario (guerra contra el narcotráfico) que ha provocado que medios de comunicación y comunicadores se conviertan en un grupo especialmente vulnerable.

Presenciamos con tristeza y desesperación, como estos han sido señalados como blancos estratégicos de ambos bandos. La libertad de expresión y el acceso a la información, son herramientas útiles para desafiar un régimen corrupto y el contaminado statu quo. En tal virtud, debemos oponernos enérgicamente a que continúen las agresiones en contra de dicho grupo.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo federal y, a través de esta, solicita a la Procuraduría General de la República (específicamente a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas) informe a esta soberanía sobre los resultados de las investigaciones y los procesos criminales seguidos en contra de los presuntos responsables de agresiones y homicidios perpetrados en contra de reporteros y periodistas, en donde se demuestre que los responsables de los diversos crímenes han sido debidamente juzgados y sancionados.

Segundo. Se tomen las medidas necesarias para frenar la oleada de delitos cometidos en contra de los medios de comunicación y de los comunicadores. Debiendo investigar hasta sus últimas consecuencias los hechos y esclarecer de manera pronta si estuvieron vinculados con la actividad periodística. Asimismo, se adopten los mecanismos adecuados para la protección de los periodistas en México.

Tercero. Se considere la creación, desde el seno de esta soberanía, de una comisión especial contra las agresiones a periodistas y en defensa de la libertad de expresión.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2010.

Senador

Ricardo

Monreal

Ávila

(rúbrica)